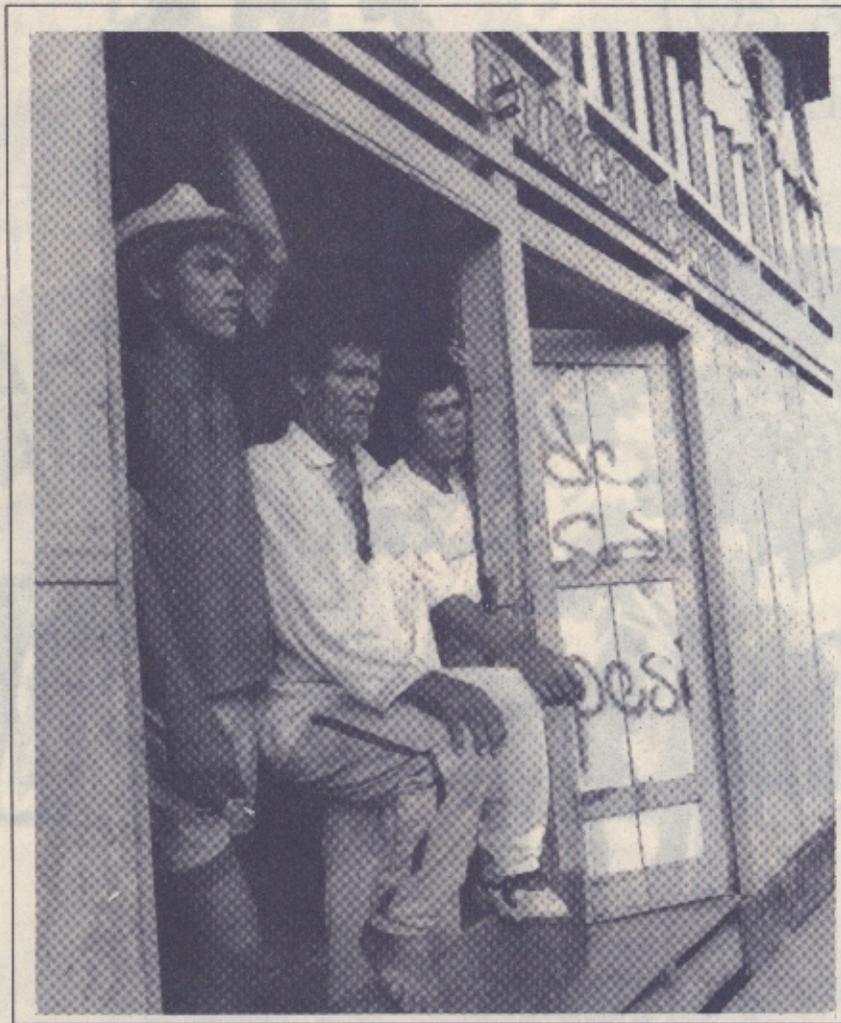


CONFLICTO Y REGIÓN





COMUNIDAD REVOLUCIONARIA



EL

LUCHA REVOLUCIONARIA
DE MASAS



ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA GUERRA Y LA PAZ TRANSFORMACIONES: DE LA LÓGICA DE LOS ACTORES ARMADOS

CLARA INÉS GARCÍA*

* Investigadora del Instituto de Estudios Regionales. INER
- Universidad de Antioquia



INTRODUCCIÓN



il novecientos noventa y siete fue uno de esos "años límites" en los que a veces incurre la historia nacional, cuando los efectos de la guerra se vuelven insoportables. La expansión del conflicto adquirió visos de una cruel-

dad inimaginada y los desplazados sumaron un millón haciendo inocultable el fenómeno ante las autoridades nacionales y regionales que hasta entonces seguían la política del avestruz. En 1997 los impactos de la guerra tocaron inclusive los bolsillos de actores que hasta entonces se habían mantenido impávidos ante los acontecimientos. Así, 1997 se convierte también en el año en que los grandes empresarios comienzan a pensar que la guerra puede dañar los negocios y la paz puede traer ganancias. Por motivos menos prosáicos y desde variados flancos, actores de la sociedad civil y de los organismos internacionales comienzan una campaña sistemática que intenta frenar la locura nacional.

Dentro de este contexto se producen también desde la academia distintos esfuerzos por tratar de descifrar la lógica del conflicto y encontrar propuestas, que aunque no plantean soluciones definitivas, al menos promueven caminos que se encausen hacia la desactivación de la violencia y la construcción de una sociedad más tolerante, capaz de guiarse por valores como la convivencia, la solidaridad y la democracia. El artículo que sigue forma parte de esa corriente general y se elaboró con la pretensión de aportar elementos de juicio sobre algunas de las características del conflicto armado, poniendo la lupa en la región más violenta del país.¹

Las preguntas a partir de las cuales se aborda el tema son:

¿Cuál ha sido el proceso de expansión territorial de los actores armados?

¿Qué papel ha desempeñado la inserción guerrillera en las regiones y cómo inciden éstas en la dinámica de la guerra y de la paz en ellas?

¿Cuáles han sido las grandes etapas del conflicto armado y cuáles las lógicas de su reconfiguración en el contexto regional?

¿Qué papel han desempeñado las políticas de paz en la dinámica de la guerra y cuáles han sido las diferencias regionales de sus impactos?



LA GUERRA

Las condiciones iniciales de la inserción de los grupos armados

Cuando las guerrillas nacientes de izquierda se propusieron en la década de los sesenta consolidar zonas rebeldes que sirvieran de base para su expansión y crear con ello las condiciones de la revolución, encontraron en Antioquia y las montañas de Córdoba uno de esos "nichos" que les brindaba especiales atractivos y facilidades. Cuatro características confluyeron para lograr este resultado:

- a) Ser una esquina de Colombia con acceso directo al Océano Atlántico y a las selvas del Pacífico.
- b) Contar con gran cantidad de territorio selvático, principal condición de existencia de los nacientes grupos armados.
- c) Ofrecer un contexto territorial y poblacional favorable, debido a las anteriores experiencias guerrilleras que se habían desarrollado allí en los años cincuenta, en particular la de Julio Guerra, que no se acogió a la amnistía de Rojas Pinilla.
- d) Contar con una frontera de colonización que, al tiempo que brindaba refugio a viejos guerrilleros liberales y campo de trabajo al proselitismo político del Partido comunista y a la dinámica de invasiones de haciendas promovida por el EPL, se adaptaba a la lógica de las autodefensas impulsadas por el Partido Comunista y las FARC.
- e) Mantener -al tiempo con su condición selvática, de frontera de colonización y de territorio margi-

nal— la pertenencia a la Colombia integrada como parte de departamentos de larga tradición económica, social, cultural y política.

Así, el norte de Antioquia y el sur de Córdoba configuraron una zona donde vieron su nacimiento el EPL y el V Frente de las FARC y donde se consolidó en una primera etapa el naciente ELN. De este núcleo territorial forman parte el alto Sinú y San Jorge en la frontera de Córdoba con Antioquia, el anillo territorial de Antioquia que rodea ese núcleo cordobés (en zonas del norte y occidente de Antioquia), el nordeste antioqueño y el bajo Cauca antioqueño y Urabá. Desde ese entonces hasta nuestros días este ha sido uno de los principales nichos de la guerrilla en Colombia (Mapa 1).

Las FARC:

En 1966-67 las recién creadas FARC envían "sondas" a tres puntos estratégicos del país. Una de ellas se implantó en el sur de Urabá, en un territorio de influencia del PCC, donde encuentra simpatizantes entre los refugiados procedentes de las antiguas filas del MRL y entre los colonos que en los años setenta habían repoblado² la zona de Murindó-Mutatá-Jiguamiandó bajo la orientación y reglas del juego impartidas por el Partido Comunista. Fueron años dedicados a la autodefensa campesina y no a los enfrentamientos militares.

El EPL:

En 1967 se crea el EPL. Su centro de operaciones es "el noroccidente colombiano" configurado por el núcleo selvático de Córdoba y las zonas antioqueñas colindantes. Allí se nutre del viejo trabajo del PCC en los sindicatos de la zona.

Durante un "primer auge" —antes de los cerros militares de finales de los sesentas y principios

de los setentas— el EPL dominó dos áreas: una, "la zona protegida" —Llanos del Tigre y altos San Jorge y Sinú— donde las Juntas Patrióticas construían "el embrión de poder popular"; la segunda era el corredor que cubría la anterior y se extendía desde Caucasia, Tarazá, Cáceres, pasaba por Santa Rita, Ituango, Peque, Dabeiba y llegaba a Mutatá. Este grupo proponía invasiones de tierra en las riberas del Sinú y del San Jorge y tenía presencia en zonas urbanas de Dabeiba y Mutatá. Su interés era establecer zonas liberadas de poder popular en el campo que sirvieran para el desarrollo de la revolución y el cercamiento de las ciudades.

El ELN:

A finales de los sesenta el ELN extiende su brazo desde Santander hacia el lado occidental del río Magdalena, pasa por el sur de Bolívar y se sitúa en el nordeste y el bajo Cauca antioqueños (Anorí, Amalfi, Segovia, Zaragoza, El Tigre). Son los hermanos Vásquez Castaño las cabezas de esta agrupación en la zona. La Serranía de San Lucas va a convertirse para este grupo en uno de los ejes de su territorio a lo largo de todos los tiempos. Es llamada "La Sierra Maestra colombiana", que entre el Magdalena medio y el bajo Cauca es eje de control y de influencia sobre el noroccidente colombiano y el corredor oriente-occidente.

La política de orden público y los cambios en la territorialidad de las guerrillas

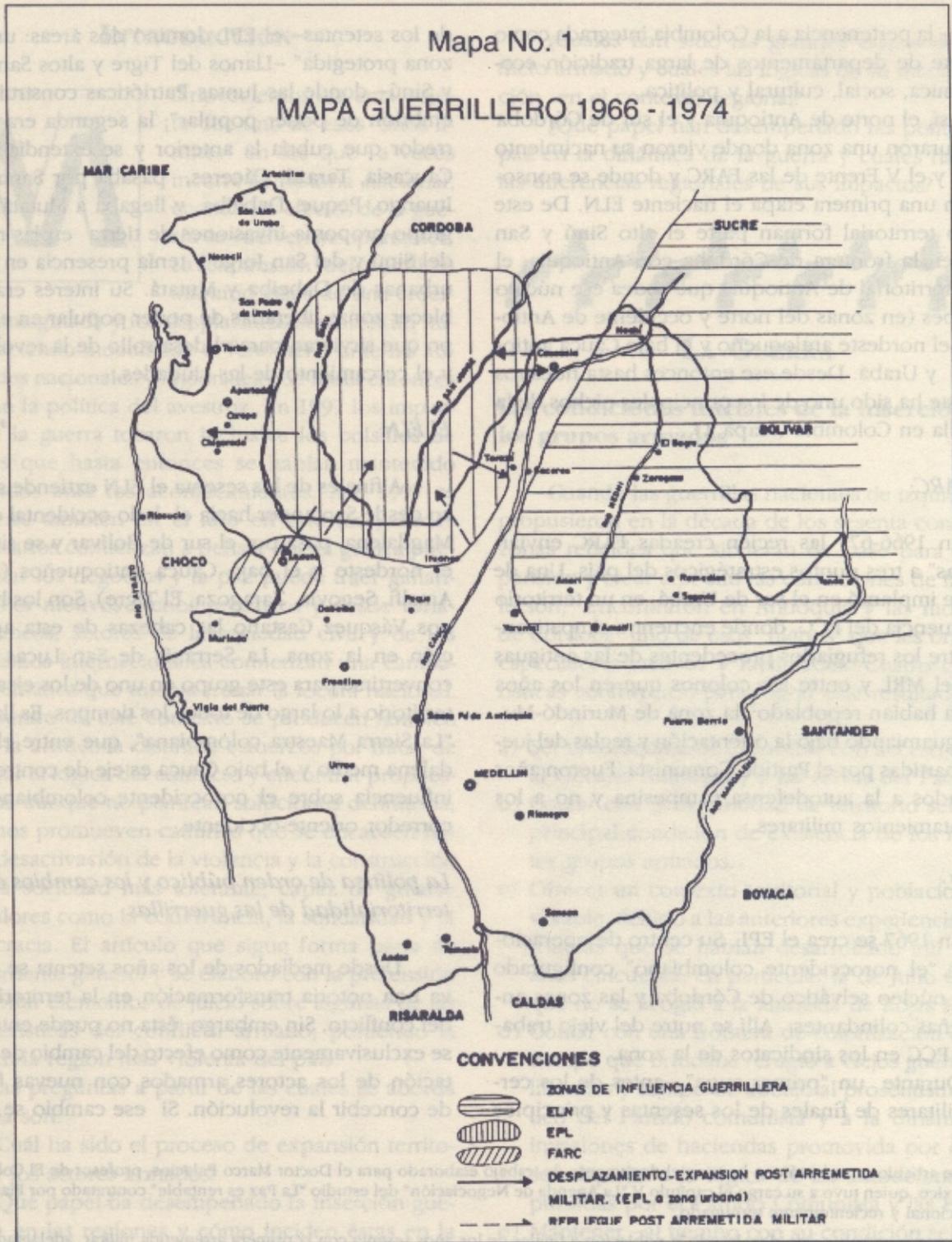
Desde mediados de los años setenta se observa una notoria transformación en la territorialidad del conflicto. Sin embargo, ésta no puede entenderse exclusivamente como efecto del cambio de orientación de los actores armados con nuevas formas de concebir la revolución. Si ese cambio se da, se

1 Este artículo se redactó con base en el documento de trabajo elaborado para el Doctor Marco Palacios, profesor de El Colegio de México, quien tuvo a su cargo el capítulo V "La Agenda de Negociación" del estudio "La Paz es rentable" contratado por Planeación Nacional y recientemente terminado.

2 En esta zona había sido desplazada la población a finales de los años sesenta con la primera arremetida militar adelantada sobre Urabá.

Mapa No. 1

MAPA GUERRILLERO 1966 - 1974



CONVENCIONES

-  ZONAS DE INFLUENCIA GUERRILLERA
-  ELN
-  EPL
-  FARC
-  DESPLAZAMIENTO-EXPANSION POST ARREMETIDA MILITAR. (EPL a zona urbana)
-  RPPI (R)QJF POST ARREMETIDA MILITAR

debe en muy buena parte a que la política de orden público adelantada por el gobierno nacional tuvo efectos muy específicos sobre los grupos guerrilleros, que llevaron a la estructuración de un nuevo escenario del conflicto armado.

La política de Orden Público de finales de los años sesentas y de principios de los setentas marcó un viraje en la estrategia y comportamiento territorial de las guerrillas. Arremetidas militares orientadas al aniquilamiento de esos grupos, cuyo objetivo de exterminio definitivo de raíz concebido desde los puramente militar, no se logra. Inicialmente producen como efecto real el repliegue de los grupos armados. Pero, en el mediano plazo, se produce una ampliación del fenómeno guerrillero hacia territorios más amplios, lo que acarrea cambios de sus respectivas estrategias. Es aquí donde el conflicto armado adquiere un nivel de mayor complejidad y amplitud.

Tal es el cuadro que muestra el análisis de los acontecimientos a partir de la política de orden público de la que estamos hablando:

Su intención era aniquilar militarmente a estos embriones guerrilleros, deshacer sus bases de apoyo persiguiendo organizaciones políticas y encarcelando líderes de la zona de influencia y acabar con los levantamientos campesinos contra terratenientes que el EPL estaba impulsando en su zona (alto Sinú y San Jorge, Llanos del Tigre).

El gobierno nacional emprendió a finales de los sesenta una campaña militar contra los nacientes grupos guerrilleros. Primero, lo hizo de manera escalonada: durante la presidencia de Carlos Lleras, contra los grupos del EPL y las FARC en el eje Córdoba-Urabá y luego, durante el mandato de Pastrana Borrero, contra el EPL y el ELN en el nordeste y bajo Cauca antioqueños.

- 3 "Por los años de 1972-73 quedaban sólo entre 12 y 15 personas en esa selva". Miguel Galeano. Entrevista Medellín, junio de 1997
- 4 Carlos Miguel Ortiz habla de primeros grupúsculos armados por los sectores de Barranquillita y Porroso, cuyos mandos centrales estaban en los Llanos del Tigre, Córdoba. Miguel Galeano, antiguo guerrillero del EPL y hoy uno de los encargados del programa de la reinserción guerrillera en Antioquia relata cómo comienzan el trabajo político a partir de la zona de Dabeiba y Mutatá (entrevista).
- 5 Miguel Galeano, entrevista.

El EPL

Contra el EPL, se organizan dos cercos de aniquilamiento. En el primero se ataca la "zona protegida" y su "corredor de protección". En el segundo se fortalecen los puestos militares de Tucurá, Chimirro, Ituango, Peque y un batallón con sede entre Chigorodó y Mutatá. Los efectos fueron los siguientes:

- a) Se aniquila prácticamente al EPL. Sus escasos reductos militares se repliegan a lo que se llamó "El NORO" –noroeste colombiano– el nicho de origen del grupo en el alto Sinú y San Jorge (Saloa, Tucuná, Tierralta, Río Verde, Río Esmeralda)³, o *salen hacia otras zonas—Urabá⁴ y bajo Cauca⁵*— y se dedican al trabajo del PC-ML en el sector estudiantil de algunos centros poblados.
- b) El EPL comienza campaña de reclutamiento para rehacer sus filas. En Antioquia se organiza el Comando Jesús María Alzate.

A partir de 1976, el EPL realiza toda clase de esfuerzos por insertarse en las organizaciones sindicales de la zona bananera, pero el Estatuto de Seguridad obliga a sus cuadros a clandestinizarse. Militarmente, conforma el Comando Pedro León Arboleda (1976), sólo a raíz del paso al EPL en 1979 de Bernardo Gutiérrez, comandante del V Frente de las FARC, esta agrupación armada adquiere nuevo vuelo: la zona norte de Urabá queda definitivamente bajo su dominio (Gutiérrez controlaba la zona desde San José de Apartadó hasta San José de Mulas). Con ello se plantean nuevas condiciones territoriales y de fuerza para la década del 80.



Las FARC

Al final de la década del sesentay principios de la siguiente se produce también el embate del ejército contra las FARC en Urabá. Entre "Bajirá, Puerto Lleras, Pavarandó y Andalucía colocaron bases del ejército...". "Casi toda la zona era de influencia del Partido Comunista, y también había zonas aledañas en donde operaban los movimientos hermanos, concretamente las FARC.... Toda esa gente que hay por esa área de Mutatá, entre los municipios de Dabeiba, Mutatá, Murindó, Riosucio, que es el área del río Jiguamiandó que sale al Atrato, del río Caño Claro y del Riosucio... es un área prácticamente campesina. Toda esa gente evacuó esa zona..."⁶ Son las épocas en que también salen 17 muchachos, todos de extracción campesina, desde Urabá con destino a la organización nacional (en todo el país no había más que 120)⁷.

Dos efectos de esta acción militar sobresalen:

- a) La zona de colonización de esa parte sur de Urabá queda en manos de Partido Comunista, que organiza el repoblamiento de las tierras abandonadas cuando se restablece el flujo de colonización. Se puede afirmar que el efecto nunca previsto de la arremetida militarista del Estado en esta zona fue el de brindar condiciones más propicias para una mejor inserción política y militar en los años posteriores al partido comunista y a las FARC.
- b) Entre 1970 y 1973⁸ las FARC decidieron -con posterioridad a la arremetida militar propiciada en el gobierno de Lleras Restrepo- un cambio de estrategia, que se concretó en la creación del V Frente y en su expansión a lo largo de la región. Sus acciones militares lo muestran claramente a

partir de 1974.⁹ Se consolidan en el sur (Dabeiba-Mutatá) y en el centro (San José de Apartadó¹⁰ donde tiene como apoyo un importante movimiento colonizador), y se extienden hacia el norte (San José de Mulatos) y hacia el Atrato (por Belén de Bajirá hacia Riosucio y Murindó).¹¹ En esa época modifican el tipo de presencia en la región; sus acciones se centran en la toma de pueblos, las arengas, los asaltos a patrullas, los asesinatos a inspectores y el asesinato sistemático y anunciado contra "soplones".

El resultado manifiesto, después de esa primera gran arremetida del ejército, fue la decidida expansión de las FARC en Urabá. Fue necesaria una segunda gran arremetida (en el segundo quinquenio de los setentas¹²) para lograr golpear militarmente a este grupo; hacia 1979 el V Frente se repliega, sale en buena parte de la zona y se refugia en regiones vecinas. Este paso abre un nuevo ciclo: la expansión de este grupo sobre regiones en las que anteriormente había estado ausente, proceso que se desarrollará en la década del ochenta. En el interior de Urabá las FARC estaban decididamente debilitadas, condición que empezaba por el paso de Bernardo Gutierrez al EPL con su gente y territorio de influencia y la drástica disminución que el Partido Comunista había sufrido como efecto de la persecución y encarcelamiento de sus líderes políticos y sindicales. Así, al comenzar la década del ochenta este partido contaba sólo con 333 militantes en Urabá y con sindicatos únicamente en tres fincas bananeras.

El ELN

En los años de 1973 y 1974 se organiza una operación militar de envergadura contra el ELN en Antioquia, denominada "Anorí 1 y 2", aludiendo al centro de emplazamiento de la plana mayor del ELN, los hermanos Vásquez Castaño. Esta operación cubrió la totalidad del nordeste y del bajo Cauca antioqueños. Allí murieron no sólo los hermanos Vásquez Castaño y el cura Laín sino que también fue apresado Lara Parada.¹³

Este grupo guerrillero queda prácticamente aniquilado en la zona. Un reducto de 54 guerrilleros se reorganiza en tres frentes: en la Ciénaga La Raya (quebrada La Caribona), en la cabecera del río Amacerí y en la zona Remedios-Segovia-Yarí. En 1977,¹⁴ se suman a la corriente general que piensa conveniente realizar trabajo urbano. Es una etapa de menores ataques militares. Asentados en la montaña, realizan esporádicas incursiones armadas especialmente en el valle del río Cauca y en el eje Tarazá-Caucasia.

Los años ochenta: los mismos actores, pero distintos significados

Hacia finales de los setentas se habla en el bajo Cauca de que "ha regresado la tranquilidad a la zona". Similares afirmaciones se escuchan en Urabá: en 1979 el presidente de UNIBAN sostiene que en Urabá, el problema es de delincuencia, y no de guerrilla. Aparentemente, las acciones de orden público habían controlado el conflicto armado, pero la realidad iba a mostrar algo muy distinto: se gestaba otro viraje en la territorialidad y en la estrategia guerrilleras. Los años ochenta abrirían en la región, al igual que en el país entero, un nuevo escenario del conflicto.

Aquí es interesante subrayar cómo las acciones del gobierno nacional terminan paradójicamen-

te, produciendo el efecto inverso al inicialmente buscado. En un primer punto, inicialmente, la guerrilla tiende a expandirse en el territorio por la vía de su repliegue-expulsión y realiza cambios en su estrategia. Esta respuesta a la política de orden público que se agenció desde finales de los sesentas y muy especialmente durante el segundo quinquenio de los setentas, es definitivamente catapultada por la política de paz. Mediante ella, el gobierno nacional pretende sustituir su orientación militarista de siempre, pero el efecto buscado sobre la condición de la guerrilla no cambia: ésta no sólo continua su proceso de expansión, sino que éste se acelera a un ritmo inimaginado; y el conflicto armado también cambia de carácter.

El proceso de expansión territorial de la guerrilla en este período fue como sigue: (Mapa 2)

Las FARC

Se extienden a las zonas vecinas: en la década anterior se habían concentrado en Urabá, ahora van a penetrar el bajo Cauca antioqueño y el nordeste antioqueño, zonas tradicionales de los otros dos grupos guerrilleros. Además, incursionan en el oriente de este mismo departamento y comienzan a implantarse en las selvas del Chocó. Al comenzar la década de los 70 penetran territorios del Alto

- 6 García, Clara Inés, *Urabá. Región, Actores y Conflicto*, 1960-1990. Coed. CEREC-INER. Bogotá, 1996 pág.50-51. Entrevista a Luis Antonio Tapias, secretario PC Urabá, 1993.
- 7 Ortiz, Carlos Miguel, op. Cit, pág. 99
- 8 En 1970 se realiza la IV conferencia de las FARC, en donde se decide un cambio de estrategia: trazan directrices de crecimiento, fortalecimiento político e ideológico, atracción del campesinado y trabajo militar, especialmente con la táctica de las "guerrillas móviles" (ataques relámpagos, huir y volver a golpear.) Allí se planea la creación del V FRENTE. Ver Carlos Miguel Ortiz, pág. 99
- 9 García Clara Inés, op. Cit, pág. 142 y mapa.
- 10 Allí, en 1973, se forma el núcleo originario del V Frente compuesto inicialmente por 4 personas (3 foráneas) y meses después ampliado por 8 más. Ortiz Carlos Miguel, op. Cit. Pág. 100
- 11 Ortiz, Carlos Miguel. Op. Cit. págs 102-3
- 12 La política de orden público del segundo quinquenio de los setentas había puesto su interés en la instalación de un batallón de la IV Brigada con carácter permanente en Urabá (1975) —único caso en el país—, en la instauración de alcaldías militares en 1976 en Mutatá, Chigorodó, Apartadó y Turbo y en el desplazamiento en 1979 de la mayor parte de los efectivos de la IV Brigada —Antioquia— a la región.
- 13 García, Clara Inés, *El Bajo Cauca Antioqueño, cómo ver las regiones*.pág. 70. coed. CINEP-INER, Bogotá, 1993.
- 14 En la Asamblea del ELN que realizan en Tarazá, con presencia del cura Pérez.

Sinú, zonas aledañas al San Jorge (radio de acción y núcleo de origen del EPL¹⁵) y otros territorios de Antioquia.

Con posterioridad, de ese Frente se desgaja el Frente 35 que controla parte del norte de Antioquia (Ituango y Peque), el nordeste y bajo Cauca de este mismo departamento y la franja que —atravesando Córdoba— se interna en Sucre.¹⁶ Este proceso de expansión se refuerza muy especialmente con los efectivos del IV Frente de las FARC en el Magdalena medio, en ese entonces expulsados por la acción paramilitar liderada por los grupos de narcotraficantes que concentraban a pasos acelerados las tierras de esa región. Allí, a partir de los años 1982 y 1983 se organizó y consolidó por primera vez en la historia reciente del país una estrategia de expulsión de la guerrilla, desde el flanco de una fuerza paramilitar. Este obligado repliegue-expulsión explica también la llegada de las FARC a los viejos territorios del ELN en el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste antioqueño.

Así en el caso de las FARC, como efecto inmediato de la política de orden público de finales de los setentas, exclusivamente orientada en un sentido militar, se observa un repliegue transitorio al interior de Urabá, pero una toma subsiguiente de nuevos territorios en regiones vecinas y la multiplicación de frentes. Es evidente que la política de paz que inaugura Belisario Betancur introduce cambios determinantes y definitivos en el escenario.

Efectos similares producen las acciones paramilitares que se piensan y ejecutan desde perspectivas puramente locales o regionales y que desde el objetivo que se proponen logran su propósito, pero con efectos perversos sobre el contexto socio-político general y las regiones vecinas: *el obligado repliegue y la consiguiente expulsión de la guerrilla de puntos específicos del territorio por las fuerzas para-*

militares desencadena también la expansión de la presencia guerrillera sobre otras zonas.

El EPL

Este grupo extiende su acción a la zona norte de Urabá, que se convierte en símbolo de su dominio, parte integrante del corredor entre Córdoba y Urabá y eje de su existencia hasta la entrega de armas en 1991.

En 1980, esta agrupación cambia de estrategia y reenfoca su interés sobre los centros de actividad económica regional y de concentración poblacional; en el caso de Urabá, se volcó sobre el eje bananero. Enunciado como propósito explícito en 1980, éste se hace realidad a partir de la política de paz de Belisario Betancur. Entre 1983 y 1986, en el ámbito de la movilización campesina, el EPL organiza y agencia lo que se conoció como el Movimiento de Recuperadores de Tierra, el movimiento de invasiones más extendido y coordinado que se haya adelantado en Urabá y en Antioquia en todos los tiempos. Este tuvo directos impactos político-militares en la región porque le dio al EPL el control sobre el eje bananero gracias a la inserción que obtuvo así en varios cientos de sus hectáreas.

En el campo sindical bananero fructifican los intentos que adelantaba el EPL desde 1979: a partir de la fecha en que se firma el pacto del gobierno nacional con esta agrupación guerrillera (agosto de 1984), SINTAGRO pasa de menos de 200 afiliados a 4.500 a principios de 1985. Esta cifra representa el mayor porcentaje de los trabajadores bananeros sindicalizados en 1988, antes de su fusión en SINTRA-INAGRO. El impacto político-militar de este control sindical toca las estructuras más profundas del conflicto regional: a partir de allí, el conjunto de conflictos —sociales políticos y militares que se desarrollan en la zona— quedan interrelacionados y, el

15 En mayo-junio de 1982 se desgaja del V Frente el XVIII, con 59 efectivos, de 197, para cubrir la zona comprendida entre la margen derecha del río Sinú y la margen izquierda del Cauca, incluyendo Ituango, Peque, serranía de Ayapel, Juan José, Los Llanos del Tigre-Córdoba, Ant. Ortiz, Carlos Miguel, op. Cit. Pág. 103

16 Ortiz, Carlos Miguel, op. Cit. Pág. 104 y entrevista a Fabián Palacio, alcalde de El Bagre, 1997

destino específico de cada conflicto dependerá en adelante de la dinámica y orientación que adquiera el conflicto político-militar mayor, éste es, el definido entre guerrillas y Estado. El conjunto de los actores regionales mayores –las FARC, el Estado, los bananeros– verán redefinidos los términos de su acción y de su relación.¹⁷

En 1985, el EPL comienza a impulsar en Urabá las denominadas “guerrillas locales” al dotar de armas a la mayoría de varones de ciertas localidades en nombre del principio de la autodefensa. “Fueron 12 los pueblos entre Urabá y Córdoba donde el EPL instauró esta modalidad: El Dos, El Tres, Pueblo Nuevo, Nueva Antioquia, El Congo, San Pablo, Tulapa, Punta de Piedra, Currulao y Pueblo Bello en Urabá; Batata y El Gallo en Córdoba”.¹⁸

En el nivel nacional, el EPL pretendía construir corredores: uno desde Urabá-Córdoba Risaralda hasta la Bota Cauca y Putumayo, en la frontera con el Ecuador; otro entre Antioquia y Santander en los límites con Venezuela; y otro cordón, desde el bajo Cauca hacia el centro (Cundinamarca).¹⁹

El ELN y las FARC en el nordeste antioqueño y bajo Cauca antioqueño.

En la década anterior el ELN había concentrado su acción en el eje Tarazá-Caucasia, ahora en 1983 se lanza decididamente al control del otro eje, el río Nechí, donde allí opera la industria minera. Así, Mineros de Antioquia se convierte en el blanco central de los ataques (torres de energía para la industria y dragas), y las poblaciones a todo lo largo de la ribera del río o de sus principales afluentes, en objeto de interés guerrillero. Las bases militares de Zaragoza y de Puerto López fueron destruidas. La primera tuvo que rehacerse en otro sitio, la segunda nunca pudo ser reconstruida.

La construcción del oleoducto Colombia que atravesaba esa zona agregó posteriormente un objetivo militar más a la guerrilla. La Troncal de la Paz se construye también allí. A partir de los ochenta opera en la región el Frente 35 de las FARC. Así queda integrado el conjunto del territorio minero –nordeste y bajo Cauca– en el conflicto armado.

Síntesis y diferencias regionales

Entre 1980 y 1987 la territorialidad del conflicto armado y la acción guerrillera se redefinen principalmente a partir de tres asuntos:

La nueva estrategia adoptada al principio de la década por el conjunto de los actores guerrilleros en el nivel nacional, se encamina a construir y consolidar corredores que ligen las distintas fronteras de Colombia y se dirigen los blancos de los ataques y del trabajo de influencia política hacia los territorios que concentran infraestructura productiva, recursos y población. En las regiones que estamos analizando, estos cambios se producen después del debilitamiento de las organizaciones guerrilleras logrado por la política de orden público de finales de los setentas.

La expansión territorial sin precedentes que se produce a todo lo largo del período se debe a tres procesos combinados: a) los efectos perversos de las políticas de orden público del período inmediatamente anterior; b) las perspectivas que abría la política de paz del gobierno nacional, que se aplicaba –en el caso de nuestra región de interés– a grupos guerrilleros sin ninguna intención ni voluntad de paz y los lanzaba así en una carrera de reposicionamiento en el campo de la guerra; c) los impactos que tenían las acciones de las organizaciones paramilitares que operan en el Magdalena medio sobre las regiones vecinas, al obligar a los grupos guerrilleros a replegarse allí.

El conflicto interguerrillero que se desata a mediados de la década y que en Urabá se alimenta en particular de la necesidad de mantener las nuevas áreas conquistadas o de recuperar las perdidas en el proceso inmediatamente anterior, también se relaciona con la reconfiguración de la territorialidad.

En este nuevo escenario, el control del territorio ya no se asume exclusivamente sobre la base de la capacidad de acción militar (enfrentamientos, asaltos, emboscadas, tomas a pueblos, arengas, inspecciones...). El control de la población civil asociada a territorios y a organizaciones sociales, al igual que la

intervención y el control sobre la movilización social se vuelven claves del dominio territorial.

Vale la pena sin embargo, resaltar diferencias regionales:

En Urabá el EPL se incrusta en el corazón del eje económico, social y político con su inserción en los sindicatos y con las invasiones de tierra en zona rural y en los núcleos urbanos. Con lo anterior el conflicto guerrillero acaba condicionando la dinámica del conjunto de los conflictos sociales y el territorio se divide grosso modo entre el norte –EPL y el sur– FARC. El eje bananero se convierte en eje de la disputa interguerrillera.

En el bajo Cauca el panorama es muy diferente: la presencia guerrillera –ELN y FARC– se da sobre bases más “clásicas”. Allí los grupos armados atacan blancos que permanecen “externos” a ellos mismos (la empresa Mineros de Antioquia, sus tierras de explotación, su sindicato) y tienen bases de apoyo en la población que reside en los territorios que controlan. Esto es, donde el Ejército Nacional no ejerce soberanía, o donde –como en el nordeste antioqueño– la UP domina políticamente. En la movilización social intervienen como socios y bajo la modalidad de movilización cívica que presiona por obras regionales y la desmilitarización del territorio (por las FFAA). En el bajo Cauca y nordeste antioqueños, las FARC y el ELN comparten el conjunto del territorio, se asientan en la zona montañosa, in-

cursonian y atacan en los valles –ejes de la comunicación y de la actividad económica regional.

Por su parte, el Estado manifiesta su presencia en batallones y efectivos militares cada vez más numerosos, no obstante, el nivel de muertes violentas y el control que efectivamente mantienen las guerrillas sobre el territorio sigue su ascenso impertérrito.

1988-1991. El nuevo punto de inflexión

El punto de inflexión hacia un nuevo escenario de la guerra lo marcan tres acontecimientos de la vida política nacional: el fin de la tregua, la elección popular de alcaldes y la entrega de armas del EPL.

Los dos primeros lanzaron al país –y a las regiones del análisis– a una nueva dinámica de guerra: los operativos militares vuelven a ocupar el primer plano y en Urabá se instaura una jefatura militar para la región; además, el paramilitarismo se entroniza ahora de manera organizada y con acciones sistemáticas en la lógica del control sobre el territorio.²⁰ Por su parte, la entrega de armas del EPL produce impactos sustanciales en las regiones donde este grupo tiene significativa presencia: transforma la territorialidad de los grupos armados y condiciona la generación de un nuevo campo de conflictos²¹; se asocia también a formas y niveles inimaginados de violencia.²²

17 Una explicación detallada de esta tesis se encuentra en: García Clara Inés. Op. Cit. págs. 145-156.

18 Ortiz, Carlos Miguel, op. cit., pág. 113

19 Entrevista a Miguel Galeano, junio de 1997

20 El paramilitarismo es la respuesta a los logros de la guerrilla –a su extensión y su nueva modalidad de incrustación en el territorio y en la dinámica social y económica del país– y a la incapacidad de las instituciones –armadas y no armadas– para neutralizarla. En zonas como el norte de Urabá y buena parte de Córdoba, donde el EPL domina, el paramilitarismo es decisivo para los cambios posteriores. Más adelante lo será en las zonas de viejo dominio de las FARC o de nuevo copamiento de las mismas. El paramilitarismo también es el instrumento más expedito que ciertas fuerzas de la sociedad civil encuentran para neutralizar la fuerza de los grupos políticos alternativos que como la UP se extienden en el mapa nacional a raíz de la apertura democrática. En regiones como Urabá y nordeste antioqueño donde la UP domina políticamente el panorama electoral a partir del 88, el paramilitarismo ataca con especial virulencia.

21 Entre los grupos que se mantienen en armas –FARC y disidencia del EPL–, entre los que asumen la vía política para la expresión de sus intereses, y entre los paramilitares y los guerrilleros que copan el terreno dejado por otros.

22 Se desencadenan el aniquilamiento sistemático entre competidores políticos y las masacres en cadena propiciadas por los actores armados en confrontación.

¿Cómo se comportan el territorio de la guerra y las estrategias de los actores armados involucrados en ella? En el primer momento, 1988-1991 la territorialidad se mantiene, pero las estrategias cambian. En el segundo trimestre, a partir de 1992 las primeras también se transforman sustancialmente.

Las guerrillas

En 1987 se unifican en el nivel nacional en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; en Urabá, el EPL y las FARC terminan sus hostilidades, unifican los sindicatos bananeros (SINTRAINAGRO es la fusión de SINTAGRO Y SINTRABANANO), plantean acciones militares conjuntas y presionan por una movilización social conjunta. Incluso se llega a pensar en la posibilidad de una insurrección general que forja el paro del 25 de octubre de 1988.

En ese período las guerrillas introducen también una nueva modalidad de acción: demostraciones coyunturales de dominio total sobre ejes de comunicación regionales²³ y demostraciones más permanentes de dominio con la destrucción de bases militares²⁴.



Los grupos paramilitares

La organización original se inició oficialmente en 1982 en el Magdalena medio²⁵ bajo la orientación de los grupos de narcotraficantes y con el nombre de MAS (Muerte a Secuestradores). Este grupo se fue fortaleciendo y se orientó cada vez con mayor claridad hacia la expulsión de los grupos guerrilleros de la región. Como efecto de sus acciones se observa muy pronto el repliegue y la retirada de las FARC de porciones muy significativas del Magdalena medio.

En Urabá se registra su aparición en 1984.²⁶ En el norte, los ganaderos apoyan la llegada de los grupos de Fidel Castaño a la zona para enfrentar acciones y extorsiones del EPL. En el eje, también algunos empresarios acuden a ellos. Pero es en 1988 cuando sus acciones se comienzan a ejercer de manera sistemática y con una estrategia territorial de mayores ambiciones. Es la época en que se producen las masacres sobre la población civil que se asocia a territorios específicos de dominio guerrillero, como las zonas ganaderas del norte, las fincas bananeras de dominio sindical del EPL y las afectadas por el movimiento de "recuperación" de tierras de este mismo grupo (Honduras, La Negra, Coquitos) y por sus milicias. Sin embargo, en palabras de Aníbal Palacio, hoy miembro de Esperanza Paz y Libertad, "mientras el EPL dominaba el norte y el eje de Saiza, los paramilitares de Córdoba no abandonaban su territorio, pero enviaban avanzadas al norte, especialmente a San Juan, Arboletes y San Pedro."²⁷

En el nordeste antioqueño aparece a finales de los ochentas el grupo que se autoidentifica como Muerte a Revolucionarios del Nordeste. En 1988, realiza la masacre de Segovia, la más masiva de todas las realizadas en esa zona y ejecutada en el pueblo más simbólico del dominio electoral de la UP (Mapa 3).

Las Fuerzas Armadas

En Urabá se instaura la jefatura militar (otra vez Urabá es la única región de Colombia donde

impera un régimen militar diferente al del resto del país); en las demás regiones se intensifican los operativos. En el bajo Cauca se instala el Comando Operativo No. 9 con carácter permanente. Se trata de desarrollar la guerra total contra los grupos guerrilleros y de controlar supuestamente el orden público alterado con la generalización del paramilitarismo y las masacres.

Los embates militares y paramilitares y los cambios en la territorialidad de las guerrillas

El impacto de esta arremetida militar y paramilitar sobre las guerrillas es diferenciado según las áreas:

En Córdoba y Magdalena medio, donde los narcotraficantes concentraron significativas porciones del territorio como latifundios ganaderos, las guerrillas fueron desterradas después de una cruenta guerra.

En cambio, en el nordeste antioqueño la disputa se planteó desde el final de los ochenta, pero la guerrilla mantuvo a lo largo de los años su dominio. Por otra parte, en Urabá el efecto fue marcadamente diferenciado. En 1991 el EPL entrega las armas y las FARC extienden su dominio.

Parece que la diferencia que asume la modalidad de la guerra según sean los grupos guerrilleros y las regiones, radica en las diferentes modalidades de inserción que cada grupo guerrillero adopta en cada región:

En Urabá, las FARC construyen un control en el que diferencian claramente los distintos planos de interés:

La acción militar —con enfrentamientos al estilo de emboscadas, ataques, tomas, y frente financiero (asaltos, secuestros y extorsión)— distingue espacialmente el territorio de asentamiento del territorio de influencia.

La acción sindical —con SINTRABANANO— se ejerce mediante cuadros políticos de vida legal —UP— o mediante la coerción directa sobre ellos cuando manifiestan orientaciones independientes.

La acción político-electoral²⁸ sirve como otro medio de influencia sobre el territorio y la población civil —la urbana en barrios muy populosos de los centros poblados y la rural en veredas completas y con cooperativas de producción (cacaotera, arrocera, platanera).

Por lo demás, las FARC son una organización con implantación nacional, pero en cambio, el EPL, a pesar de su significado político y militar nacional, tiene ante todo una implantación regional concentrada en el eje Córdoba-Urabá. Además, en términos de su estrategia y también a diferencia de las FARC, tiene en los hechos fuertemente imbricados su aparato armado y su aparato político, ya que introducen lo militar en lo social con la implantación de las milicias en las fincas bananeras y con las “guerrillas locales” en zonas urbanas. Sin embargo, no cuentan con un campo de influencia político-electoral. Para ejercer dominio directo sobre amplio

23 A finales de la década el EPL —Frente Bernardo Franco— controló la carretera Turbo-San Pedro de Urabá durante 4 días consecutivos y la de Turbo-Necoclí (entre El Dos y Tie). Las FARC controlan la carretera Medellín-Turbo, sector de La Llorona. Ortiz, Carlos Miguel, op. Cit. Pág 114.

24 En Zaragoza y Puerto López el ELN ataca directamente las respectivas bases militares y las destruye, desterrando al ejército de la segunda localidad desde ese entonces hasta hoy y obligando al mismo en la primera a cambiar el sitio de su base.

25 Se constituyen a finales de 1981 en Cali y a partir del secuestro de una de las hermanas de los Ochoa del Cartel de Antioquia.

26 Ortiz, C.M. “según prensa”.

27 Anibal Palacio. Recortes de prensa. Centro de documentación INER, Universidad de Antioquia.

28 El Partido Comunista siempre ha pregonado su estrategia de “la combinación de todas las formas de lucha”. En Urabá esta asociación se ha trabajado desde los años sesenta cuando agrupación política y organización guerrillera se implantan allí (ver cita 6 de este mismo documento). Con la UP, si bien en los primeros años la UP entabló un proceso de relativa autonomización, en una segunda etapa pretende ser sometido por la organización guerrillera como su apéndice.

territorio y población civil concentran entonces sus acciones en el control de localidades pequeñas pero de amplia red territorial y en el de fincas y obreros de la zona central de la región. Con ello se adquieren capacidad para incidir sobre la dinámica de las utilidades en determinadas coyunturas. Pero lo sindical lo ejercen bajo la misma modalidad de las FARC.

La diferente modalidad de inserción de los dos grupos guerrilleros en Urabá genera necesariamente diferencias en la acción de quienes los confrontan. Cuando se trata de extirpar al EPL, las acciones en contra de la población civil son más radicales; las masacres se convierten en el medio principal y golpean a obreros y pobladores en general. En cambio, para combatir a las FARC, se mantuvieron enfrentamientos militares en puntos neurálgicos de encuentro y en determinadas coyunturas; el exterminio a su influencia en el campo de la población civil se dirigió selectivamente a los miembros de la UP.

De ahí que la arremetida militar y paramilitar de finales de los ochenta tuviera efectos diferentes sobre los dos grupos.

Es interesante anotar que en zonas diferentes, como en el bajo Cauca antioqueño y en el nordeste antioqueño, las FARC y el ELN controlan territorio utilizando otra modalidad, que se manifiesta en su diferente inserción regional, aunque también dirija su interés sobre los movimientos sociales. En primer lugar, porque la movilización social que allí se produce no se basa en la organización de los trabajadores de fincas o empresas; las movilizaciones cívicas regionales, que tienen un fuerte componente de los llamados "éxodos campesinos", no afectan ni la organización del trabajo, ni la productividad diaria, ni las relaciones obrero-patronales. Son movilizaciones por asuntos de desarrollo regional general en las que es el Estado el involucrado, no el particular.

En segundo lugar, al empresario o a la empresa se los afecta financieramente mediante la extorsión, el chantaje y el terrorismo, pero no se "ocupa" directamente el territorio donde se ejerce el acto productivo, ni la gestión de la empresa (planta la-

boral, condiciones del ejercicio de las relaciones obrero-patronales, salarios, contratos....)

En síntesis: las distintas estrategias guerrilleras sobre la población civil, el territorio y las utilidades de las empresas producen maneras de reaccionar diferentes entre quienes los combaten (fuerzas armadas y paramilitares). Estas diferencias se observan también más adelante cuando los paramilitares asumen el papel protagónico en la guerra: mientras en Urabá su acción de tierra arrasada es frontal e integral, en el bajo Cauca y en el nordeste antioqueño tiende a ser más difusa y silenciosa.

A partir de 1992...

A partir de este momento las territorialidades cambian sustancialmente. En el contexto nacional se producían la Constituyente (1990-1991), la toma de La Uribe (octubre de 1990), y la entrega de las armas por el EPL (1991). En 1992 fracasaban los diálogos de Tlaxcala.

En Urabá

El detonante mayor de la transformación de la territorialidad del conflicto fue la política de paz con el EPL, tal como fue manejada en el contexto de la guerra en Córdoba-Urabá. La entrega de este grupo no fue acompañada por una política de copamiento militar y de fortalecimiento institucional en el territorio "entregado"; la reinserción no se montó sobre soluciones reales (económicas y sociales) para los individuos que la acogieron; la ubicación de un buen contingente de antiguos guerrilleros en los organismos de seguridad de la misma región no hizo cosa distinta que colocarlos de nuevo en el campo de la guerra, en tanto que tales organismos estaban de hecho comprometidos en la guerra sucia.

Todo lo anterior es decisivo para el rumbo que toman los acontecimientos subsiguientes: las FARC terminan copando el territorio dejado por el EPL y; el Estado abandona el campo de la guerra y los grupos. Por su parte los grupos paramilitares - después de un breve período de distensión y de accio-

nes sociales en favor de sectores de población en territorios del EPL- asumen la guerra frontal contra las FARC y los reductos del EPL que no se acogieron al pacto político de 1991. Primero adelantan una acción de tierra arrasada en la zona norte, sobre la cual desde años atrás contaban con conocimiento e influencia; luego la extienden de manera sistemática a todo lo largo de la región (Mapa 4).

Las FARC

Al principio del período las FARC y sus socios en la Cordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) (ELN y Caraballistas) copan el territorio dejado por el EPL²⁹, y hacen demostración de su fuerza. Primero, con la arremetida terrorista que FARC y ELN adelantan en todo el país volando torres de energía y comunicaciones, que en Antioquia se da con especial virulencia y particularmente en Urabá y el bajo Cauca³⁰. En segundo lugar, con el bloqueo de dos de las tres vías de entrada a Urabá: en mayo 22-29/92 (en La Llorona entre Medellín y Turbo y en el tramo Córdoba-Arboletes).

También, desde la entrega del EPL, las FARC comienzan a asesinar a los reinsertados de esa agrupación³¹ y paralelamente se desencadena la guerra en el norte de Urabá entre paramilitares (grupo de Fidel Castaño) y las FARC. Ésta comienza desde el mismo año de 1992 y alcanza su punto culminante en noviembre de 1994 con la toma que intenta la guerrilla de San Pedro de Urabá, en la que despliegan una fuerza de 400 hombres, pero sufren una contundente derrota, perpetrada oficialmente por el ejército. Pero en realidad, según lo narran los testigos, lograda gracias al apoyo de los paramilitares.

La situación territorial de las FARC a la altura de 1993 era la siguiente: el Frente V con 300 hombres domina desde el eje hasta San Pedro de Urabá y mantiene el manejo operacional y financiero de las FARC en Urabá.

El Frente 34, formado en 1990 y en ese momento con 300 hombres, está dividido en tres cuadrillas: Unguía-Acandí, Mutatá-Riosucio y Dabeiba Frontino. El Frente 34 que operaba en el Chocó

(Unguía, Riosucio, Rioneca y Balboa y frontera con Panamá) comenzó a desplazarse a mediados del 91 a Acandí y Zapsurro.

Ante la arremetida del ejército este año contra la guerrilla, ésta usa la frontera con Panamá como refugio y busca acordar un "pacto de no agresión" con la Policía de ese país. En 1994, las FARC corren el Frente 58, y especialmente el 18 que tenía en Córdoba, hacia el alto Sinú para controlar la carretera Medellín-Turbo.

La zona más afectada por los asaltos guerrilleros se concentra entorno a las vías de los municipios de Chigorodó, Mutatá y Dabeiba.³²

Las Fuerzas Armadas

Su estrategia puede calificarse sintéticamente como de "abandono del campo". Variados hechos ilustran esta afirmación: en el campo militar no se desarrolló ninguna acción de copamiento del territorio dejado por el EPL. Sobre el resto de la región sólo se producen las consabidas visitas relámpago de los altos mandos militares y de gobierno, sobrevuelos de la zona por el Ministro de Defensa y altos mandos en las coyunturas de máximo terrorismo y de notoria intensificación de la violencia en la región. Así, el ejército abandonó de hecho la función de la estrategia militar en los grupos paramilitares. Aunque los militares lo niegan, la población reiteradamente afirma lo contrario: "realizan operativos con el ejército y no se conocen enfrentamientos entre ellos"; testigos que visitan la zona también constatan cómo en determinadas áreas es evidente cómo comparten territorios. De hecho, la Comisión de Investigación de actores de la Violencia, las comisiones de las ONG y Pax Christi, todas afirman los nexos entre Ejército-Paramilitares. También en materia de política de orden público y una vez constatado el hecho de que sobre los antiguos territorios del EPL se asentaban el resto de grupos armados (guerrilleros y paramilitares), el Estado pareciera ausente: sólo enuncia los consabidos "planes de seguridad en todo Urabá" (dic/93) y añade más contingentes a los ya existentes³³; pero las grandes

batallas coordinadas y sistemáticas no se vieron sino durante los últimos tiempos (1997) cuando se volvió insoportable el control que demostró tener la guerrilla sobre el paso de La Llorona (carretera Medellín, Urabá), punto estratégico de entrada a Urabá. En el campo de la política, el Estado también pareció abandonar toda intención de intervención. Lo evidencian la renuncia de Juan Gonzalo Restrepo como gerente-asesor del gobierno departamental para Urabá, motivada por su convicción de que "el gobierno de Antioquia no tiene planes para la zona", (92-08-27) y el cambio de Bernardo Echeverri Ossa integrante de la Consejería para la Política Social del gobierno nacional, pero muy cercano a Urabá (92-09-12). Así el Estado borraba con el codo lo que anunciaba con la mano: el Plan Urabá que lanzaba en 1992, la creación de la Consejería para Urabá (José Noé Ríos), y las inversiones a propósito del Plan de Emergencia por el terremoto de Murindó. En materia de política de paz, el Estado ni siquiera guarda la fachada. Sólo un ejemplo: se realiza el Foro por la Paz y la Convivencia de octubre de 1994, año de los más álgidos enfrentamientos entre Esperanzados y UP en el eje bananero y de las operaciones paramilitares de tierra arrasada que se practicaban en el norte, con 200 asistentes, pero sin presencia del gobierno nacional. La única actividad que el gobierno adelantó en este sentido fue la negociación con la CRS que tuvo impactos sólo muy puntuales.

Los paramilitares

"Mientras en los ochenta el EPL dominaba el norte y el eje de Saiza, los paramilitares de Córdoba no abandonaban su territorio, pero enviaban avanzadas al norte, especialmente a San Juan, Arboletes y San Pedro"³⁴ y ejecutaban acciones puntuales –masacres– en norte y eje bananeros. A finales de 1990 y a raíz de las negociaciones del EPL, Fidel Castaño ofrece en sus tierras del norte chocoano "reforma agraria" y "créditos" a grupos de campesinos (al igual que lo había hecho en Córdoba y en otras zonas de Antioquia). Castaño declara en ese momento que no espera indulto ni trato preferencial frente a la justicia, sino "sólo contribuir con el desarrollo económico y social de la región"³⁵.

Sin embargo esa distensión dura bien poco: hasta cuando las FARC comienzan a ejercer dominio sobre los viejos territorios del EPL. "Al mismo tiempo que empezó el plan de copiamiento de espacios dejados por los antiguos guerrilleros, "Rambo" movió sus fichas y las puso en Necoclí, San Juan, San Pedro y Arboletes, adonde las FARC también movieron sus peones."³⁶

En ese momento comienza un verdadero plan con fases y metas para "recuperar" el territorio a sangre y fuego; ese plan se adelanta arrasando con todo vestigio de la guerrilla o de sus posibles apoyos y simpatizantes, concentrando paralelamente tie-

29 El V Frente le abrió espacio al ELN en Urabá al calor de los pactos de la CGSB. Igualmente se lo abre al Frente Bernardo Franco (del EPL en armas) en la zona del sur de Urabá (en El Porroso, Mutatá), uno de los mayores campamentos guerrilleros en la región, y zona tradicional del dominio de las FARC.

30 En Enero y febrero de 1991 se producen 20 acciones terroristas (torres, embarcaciones, antena repetidora) cometidas por FARC y ELN. Afirman que la entrega de armas del EPL no los hará flaquear en su empeño por controlar la zona. En agosto se produce la segunda oleada terrorista contra la infraestructura.

31 Comisión investigadora de los Actores de la violencia, 1995.

32 Inventario hecho por el Ejército Nacional, El Tiempo,

33 Dos batallones de contraguerrilla, un batallón de las Fuerzas Especiales y una agrupación aérea de apoyo táctico de las FAC

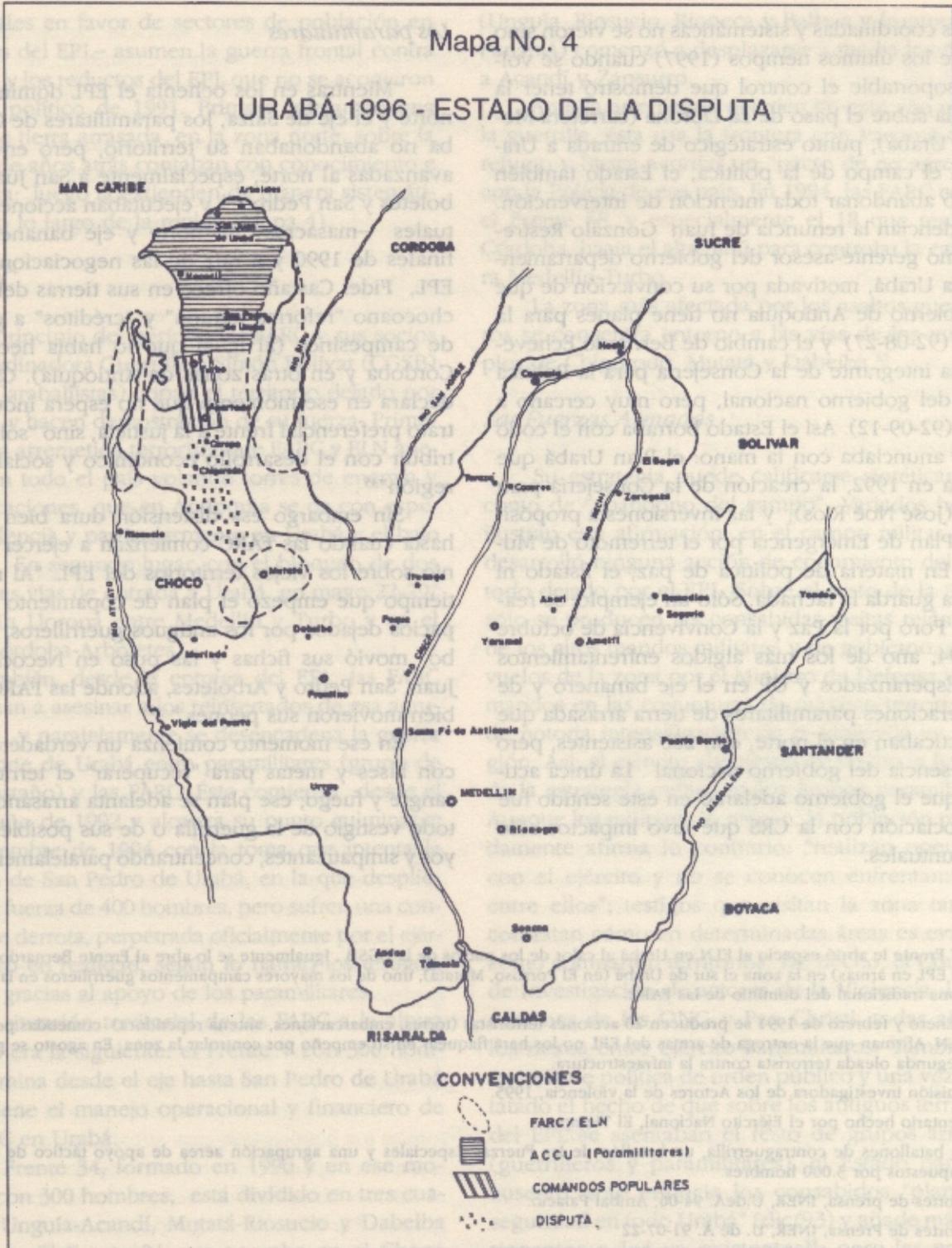
34 Recortes de prensa, INER, U.deA. 94-06, Anibal Palacio.

35 Recortes de Prensa, INER, U. de A. 91-07-22

36 Recortes de prensa, INER, U. de A. 94-06. Anibal Palacio

Mapa No. 4

URABÁ 1996 - ESTADO DE LA DISPUTA



rras y transformando las relaciones de fuerza del poder político.³⁷

A finales de 1994, el resultado en el norte de Urabá es una tierra totalmente arrasada y en manos de las ACCU; en 1995 comienza a extenderse esta misma acción paramilitar hasta el corazón del eje bananero. Por esa época opera en el eje Córdoba-Urabá un total de seis bases paramilitares.³⁸

En 1996 los paramilitares inician acciones dentro de los cascos urbanos del eje bananero (en noviembre de 1996 comienza el patrullaje en barrios de UP y Esperanzados) y su expansión hacia el sur (Mutatá, Pavarandó); en el Atrato (Riosucio) lo hacen a partir de enero de 1997 (Mapa 5).

En abril de 1997 anuncian la constitución de una asociación a nivel nacional. Así, las Autodefensas Unidas de Colombia se formalizan y se dotan de un discurso estratégico nacional que busca contener a la guerrilla, expulsarla de las zonas claves y reducir su presencia en zonas marginales. De hecho los grupos que se asocian son grupos locales o regionales que coordinan acciones en el nivel regional.

A este panorama se suman las CONVIVIR.... En abril de 1997 se contabilizan en Antioquia 61 con personería jurídica. Estas se concentran en Medellín, oriente cercano y suroeste las zonas más densamente pobladas de Antioquia.

Para concluir podemos afirmar:

El proceso de paz con el EPL reconfigura completamente el conflicto regional: al no contar el Estado con una estrategia de control del territorio

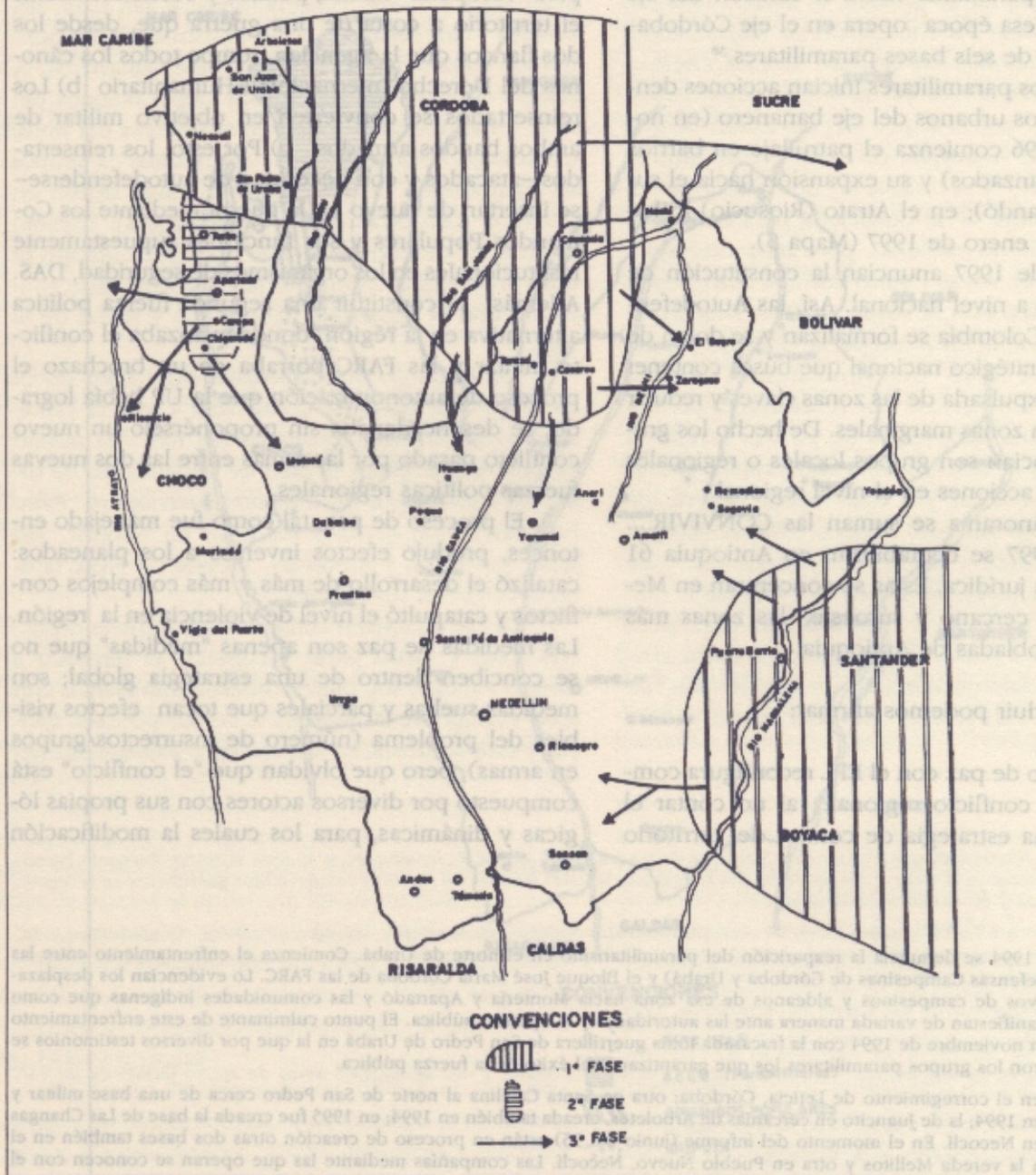
abandonado por el EPL, son los grupos armados –guerrilleros y paramilitares– quienes se dan a esa tarea. Cambia así sustantivamente la territorialidad de los actores en armas y la calidad y dinámica del conflicto: a) Se consolida la estrategia paramilitar para “recuperar” militar, política y económicamente el territorio a costa de una guerra que, desde los dos flancos que la agencian, rompe todos los cánones del Derecho Internacional Humanitario b) Los reinsertados se convierten en objetivo militar de ambos bandos armados, c) Por esto, los reinsertados –atacados y con necesidad de autodefenderse– insertan de nuevo en la guerra mediante los Comandos Populares y sus funciones supuestamente institucionales en los organismos de seguridad, DAS. Además, al constituir una segunda fuerza política alternativa en la región, donde avanzaba el conflicto militar y las FARC borraba de un brochazo el proceso de autonomización que la UP había logrado, se desencadenaba sin proponérselo un nuevo conflicto pasado por las armas entre las dos nuevas fuerzas políticas regionales.

El proceso de paz, tal como fue manejado entonces, produjo efectos inversos a los planeados: catalizó el desarrollo de más y más complejos conflictos y catapultó el nivel de violencia en la región. Las medidas de paz son apenas “medidas” que no se conciben dentro de una estrategia global; son medidas sueltas y parciales que tocan efectos visibles del problema (número de insurrectos/grupos en armas), pero que olvidan que “el conflicto” está compuesto por diversos actores con sus propias lógicas y dinámicas, para los cuales la modificación

37 Entre 1993 y 1994 se denuncia la reaparición del paramilitarismo en el norte de Urabá. Comienza el enfrentamiento entre las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y el Bloque José María Córdoba de las FARC. Lo evidencian los desplazamientos masivos de campesinos y aldeanos de esa zona hacia Montería y Apartadó y las comunidades indígenas que como víctimas se manifiestan de variada manera ante las autoridades y la opinión pública. El punto culminante de este enfrentamiento se produce en noviembre de 1994 con la fracasada toma guerrillera de San Pedro de Urabá en la que por diversos testimonios se sabe que fueron los grupos paramilitares los que garantizaron el éxito de la fuerza pública.

38 La Vorágine en el corregimiento de Leticia, Córdoba; otra en Santa Catalina al norte de San Pedro cerca de una base militar y conformada en 1994; la de Juancito en cercanías de Arboletes, creada también en 1994; en 1995 fue creada la base de Las Changas (Hacienda), en Necoclí. En el momento del informe (junio del 95) están en proceso de creación otras dos bases también en el norte: una en la vereda Mellitos y otra en Pueblo Nuevo, Necoclí. Las compañías mediante las que operan se conocen con el nombre de Los Mocha-cabezas, Los Tangueros y Los Escorpión.

Mapa No. 5
EXPANSIÓN PARAMILITAR 1993 - 1997



tras y transformando las relaciones de fuerza del poder político.³⁷

A finales de 1994, el resultado en el norte de Urabá es una tierra totalmente arrasada y en manos de las ACCU; en 1995 comienza a extenderse esta misma acción paramilitar hasta el corazón del eje bananero. Por esa época opera en el eje Córdoba-Urabá un total de seis bases paramilitares.³⁸

En 1996 los paramilitares inician acciones dentro de los cascos urbanos del eje bananero (en noviembre de 1996 comienza el patrullaje en barrios de UP y Esperanzados) y su expansión hacia el sur (Mutatá, Pavarandó); en el Atrato (Riosucio) lo hacen a partir de enero de 1997 (Mapa 5).

En abril de 1997 anuncian la constitución de una asociación a nivel nacional. Así, las Autodefensas Unidas de Colombia se formalizan y se dotan de un discurso estratégico nacional que busca contener a la guerrilla, expulsarla de las zonas claves y reducir su presencia en zonas marginales. De hecho los grupos que se asocian son grupos locales o regionales que coordinan acciones en el nivel regional.

A este panorama se suman las CONVIVIR.... En abril de 1997 se contabilizan en Antioquia 61 con personería jurídica. Estas se concentran en Medellín, oriente cercano y suroeste las zonas más densamente pobladas de Antioquia.

Para concluir podemos afirmar:

El proceso de paz con el EPL reconfigura completamente el conflicto regional: al no contar el Estado con una estrategia de control del territorio

abandonado por el EPL, son los grupos armados – guerrilleros y paramilitares– quienes se dan a esa tarea. Cambia así sustantivamente la territorialidad de los actores en armas y la calidad y dinámica del conflicto: a) Se consolida la estrategia paramilitar para “recuperar” militar, política y económicamente el territorio a costa de una guerra que, desde los dos flancos que la agencian, rompe todos los cánones del Derecho Internacional Humanitario b) Los reinsertados se convierten en objetivo militar de ambos bandos armados, c) Por esto, los reinsertados –atacados y con necesidad de autodefenderse– se insertan de nuevo en la guerra mediante los Comandos Populares y sus funciones supuestamente institucionales en los organismos de seguridad, DAS. Además, al constituir una segunda fuerza política alternativa en la región, donde avanzaba el conflicto militar y las FARC borraba de un brochazo el proceso de autonomización que la UP había logrado, se desencadenaba sin proponérselo un nuevo conflicto pasado por las armas entre las dos nuevas fuerzas políticas regionales.

El proceso de paz, tal como fue manejado entonces, produjo efectos inversos a los planeados: catalizó el desarrollo de más y más complejos conflictos y catapultó el nivel de violencia en la región. Las medidas de paz son apenas “medidas” que no se conciben dentro de una estrategia global; son medidas sueltas y parciales que tocan efectos visibles del problema (número de insurrectos/grupos en armas), pero que olvidan que “el conflicto” está compuesto por diversos actores con sus propias lógicas y dinámicas, para los cuales la modificación

37 Entre 1993 y 1994 se denuncia la reaparición del paramilitarismo en el norte de Urabá. Comienza el enfrentamiento entre las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y el Bloque José María Córdoba de las FARC. Lo evidencian los desplazamientos masivos de campesinos y aldeanos de esa zona hacia Montería y Apartadó y las comunidades indígenas que como víctimas se manifiestan de variada manera ante las autoridades y la opinión pública. El punto culminante de este enfrentamiento se produce en noviembre de 1994 con la fracasada toma guerrillera de San Pedro de Urabá en la que por diversos testimonios se sabe que fueron los grupos paramilitares los que garantizaron el éxito de la fuerza pública.

38 La Vorágine en el corregimiento de Leticia, Córdoba; otra en Santa Catalina al norte de San Pedro cerca de una base militar y conformada en 1994; la de Juancito en cercanías de Arboletes, creada también en 1994; en 1995 fue creada la base de Las Changas (Hacienda), en Necoclí. En el momento del informe (junio del 95) están en proceso de creación otras dos bases también en el norte: una en la vereda Mellitos y otra en Pueblo Nuevo, Necoclí. Las compañías mediante las que operan se conocen con el nombre de Los Mocha-cabezas, Los Tangueros y Los Escorpión.

de una de las condiciones de ese conflicto implicará modificación de las propias. Al no tenerse en cuenta los distintos componentes del conflicto ni preverse nada para que unas medidas en uno de sus aspectos tengan efectividad sobre el conjunto de la dinámica del conflicto, el efecto global sobre las condiciones de la guerra no puede ser nada distinto al observado: un efecto perverso.

La ausencia total de política pública frente a la degradación del conflicto no hace sino reforzar la tendencia general. La negociación con la CRS no tiene impacto significativo sobre la región como sí lo tuvo la del EPL.

En el bajo Cauca

Allí el proceso de paz con el EPL no tuvo ningún efecto. El ejército pareciera tener como principal función solo salvaguardar la infraestructura de la empresa Mineros de Antioquia y el Oleoducto Colombia y neutralizar la acción de la guerrilla sobre la troncal a la Costa Atlántica, pues sus operativos no determinan cambios en la territorialidad ni en el dominio guerrillero de la zona. Es el paramilitarismo el que tiende a convertirse en la nota predominante, que condiciona la orientación y la territorialidad de la confrontación armada.

El paramilitarismo se inicia en el municipio de Caucaasia, y se extiende a todo lo largo del eje formado a lo largo del río Cauca y de la Troncal a la Costa. Es un paramilitarismo directamente organizado por los grupos de narcotraficantes que por ese entonces concentran tierras en la zona, al igual que años antes lo habían hecho en el Magdalena medio. 1993 marca el inicio de su auge y los dos últimos años su momento de intensidad mayor.

Su accionar es el responsable del cambio de territorialidad de la guerrilla en el bajo Cauca. En los últimos años los grupos guerrilleros han sido fuertemente presionados arrinconados y desplazados.



LA PAZ

Dinámica, impactos y diferencias regionales

De las distintas iniciativas de paz que se han emprendido desde el gobierno de Belisario Betancur hasta nuestros días, sólo dos han tenido reales efectos sobre la dinámica social y política de las regiones que concentran la mayor parte y los más intensos conflicto en Antioquia (Urabá y bajo Cauca). Fueron ellas la tregua y los intentos de negociación del gobierno Betancur, y la negociación y entrega de armas del EPL en 1990/91. Sin embargo, los impactos regionales fueron muy diferentes en uno y otro caso:

En el bajo Cauca

En la primera plana de la acción, del discurso y de los impactos se manejaron las medidas que tocaban la inversión estatal, en particular el Plan de Rehabilitación Nacional y el Plan de Desarrollo Departamental que por primera vez en 1983 consideraban al bajo Cauca como objeto de inversión "regional". En torno de estas acciones se desencadenó un amplio y prolongado movimiento cívico, en el que participaron las diferentes fuerzas sociales y políticas presentes en la región, al igual que los grupos guerrilleros asentados en la zona (FARC y ELN). Sin embargo, estos últimos mantuvieron límites definidos con respecto al movimiento, de tal manera que la dinámica regional que se generó en torno de la inversión pública, que por primera vez fluía allí, se mantuvo dentro de cauces que jugaron en favor de la construcción regional. La presión sobre el Estado se centró en el tipo, la cuantía y los ritmos de la inversión en infraestructura física y social y por el reconocimiento del movimiento como interlocutor de carácter regional; también se reivindicó la desmilitarización de la zona y los derechos ciudadanos a la libre circulación, en lo cual las guerrillas estaban también interesadas.

Paralelamente, de manera independiente a la dinámica del movimiento social, los grupos guerri-

llos mantuvieron una escalada en la expansión territorial que se propusieron para la década del ochenta en esta zona: en ese momento las FARC penetraron la región y el ELN giró su foco de atención sobre el eje territorial a lo largo del río Nechí donde la empresa Mineros de Antioquia y los constructores del Oleoducto Colombia se convirtieron en sus blancos predilectos.

Diríase que en el bajo Cauca la coyuntura de paz del gobierno de Belisario Betancur no transformó ni la estrategia ni el ritmo guerrilleros. Socialmente, contribuyó a catalizar una movilización social de amplias repercusiones regionales, hasta que ésta fue duramente aniquilada por la ola paramilitar que desde 1988 se desencadenó allí y en otras regiones del país.

En la coyuntura de paz con el EPL, el bajo Cauca no obtuvo ningún beneficio, ni siquiera transitorio: esta región no era asiento de ese grupo. Mientras en Urabá la población vivía en 1990 y 1991 un

período de distensión, en el bajo Cauca la población continuaba sometida al ritmo de las masacres y los éxodos de familias y veredas campesinas en diferentes puntos de su territorio.

En Urabá

Coyuntura de la tregua, años 80

El proceso orientado hacia el logro de la paz en esta coyuntura tuvo en la región un significado diferente al calculado y proporcionó en cambio a los actores armados condiciones que fueron aprovechadas y que relanzaron el conflicto a niveles más complejos y de más intensa violencia.

En efecto, en el ámbito nacional primaban una propuesta de diálogo nacional planteada por el M-19 y una sensación generalizada en la opinión pública y entre algunos sectores políticos, de saturación ante la situación de guerra sin resultados. Por



el contrario, en Urabá, los grupos guerrilleros – FARC y EPL– estaban seriamente debilitados y en condiciones de repliegue, los dirigentes gremiales no consideraban a la guerrilla como un problema (sí a la delincuencia) y los poderes tradicionales no veían ya en el Partido Comunista un potencial “enemigo”, pues el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala lo había reducido a un total de 333 militantes en la región.

Así, en Urabá unas condiciones de paz no demandadas y brindadas gratuitamente a grupos regionalmente debilitados, facilitaron su inusitado fortalecimiento, e incidieron así profundamente en la transformación de los términos del conflicto en la región.

A partir de entonces, éste adquiere las siguientes dinámicas:

En el plazo más inmediato: a) se produjo el asalto del espacio “político” por las guerrillas que dominaron sindicatos, organizaron tomas de tierras y pretendieron realizar una movilización cívica regional; b) se agudizaron los motivos que desencadenaron la guerra interguerrillera, que tuvo su clímax en 1985/86 cuando, por cuenta de la misma, murieron más de 100 obreros de las fincas bananeras.

En el más largo plazo: a) se articularon conflictos diferentes y autónomos en un conflicto regional que subsume al resto a su lógica y dinámica; b) el poder guerrillero adquiere mayor capacidad de desestabilización, mayor cobertura, mejor inserción en el territorio y condiciona las dinámicas de movilización social y política de la misma; c) los niveles de violencia se agudizan, y sus sentidos se cruzan dejando cada vez más víctimas del lado de la sociedad civil.

El fracaso de la política de paz de ese entonces, llevó a otro período de guerra total, que suma nuevos elementos con efectos igualmente transformadores del conflicto.

Los años 90

Se puede afirmar que durante estos años sólo se dió una coyuntura en la que la política del gobierno estuvo encaminada específicamente hacia la

paz: la negociación y acuerdo con el EPL en 1990-1991. Sin embargo, a pesar de su importancia, ésta no tuvo los efectos esperados sino en el plazo más inmediato de los acontecimientos. En el mediano plazo, esta política no sólo no logró lo que se proponía, sino fue corresponsable de la agudización de la guerra y de la mayor complejidad que adquirió el conflicto en la región, por no haberla acompañado de una estrategia integral de recuperación institucional y militar de los territorios dejados por esta agrupación armada.

La entrega de armas del EPL

Es evidente que la coyuntura internacional de crisis del modelo socialista y la coyuntura nacional de diálogo con el M-19 y de gestación de la Asamblea Nacional Constituyente plantean un “momento” favorable a la negociación con grupos guerrilleros. En la región, la dinámica de la violencia había alcanzado niveles extremos nunca antes vistos en su historia y los distintos actores regionales se abrieron también a dicha posibilidad.

La diócesis de Apartadó desempeñó su papel en este proceso. Con un mes de anticipación a la posesión de su cargo, Monseñor Duarte Cancino tuvo acceso a documentos que hacían un diagnóstico sobre la zona y a partir de él se comprometió en un trabajo basado en la búsqueda de la reconciliación y la paz. La Diócesis, creada precisamente en 1988 –cuando fracasa el primer intento de paz que se hizo en el país y se declara la guerra total– ha sido de hecho y a lo largo de todos los tiempos el único puente con la guerrilla.

Paralelamente, fue la misma Diócesis la que sirvió de puente en el proceso con Fidel Castaño, cuando éste resolvió realizar programas de “reforma agraria” en las zonas donde controlaba grandes extensiones de tierra y que estaban afectadas por las cruentas características de la confrontación. Fue ante Monseñor, en Apartadó, donde los aspirantes a beneficiarios entregaron los formularios.

El gremio de bananeros jugó igualmente un papel clave, pues un número significativo de sus

miembros abrieron canales de comunicación con gentes del EPL y lograron llevar al gremio en su totalidad a comprometerse con la paz con este grupo. Entregadas las armas, uno de los primeros actos fue el "Pacto Social" entre Esperanza, Paz y Libertad y Augura, pacto en el que ambas partes se comprometían con el desarrollo político y social de la zona, propiciando medidas en pro del empleo, la recreación, la educación, el derecho a la vida.

El Ejército se comprometió igualmente. Los miembros de Esperanza, Paz y Libertad atestiguan cómo cambiaron inmediatamente las relaciones con las fuerzas del orden. La entrega de armas del EPL tuvo impactos positivos inmediatos. Podemos enumerar los más sobresalientes: se puso fin a la Jefatura Militar de Urabá y se produjo la distensión general. Todos los actores –sindicatos, ejército, bananeros, autoridades municipales, militantes políticos– así lo atestiguan. Coincidentalmente o no, reaparecen también las multinacionales en Urabá. Además, se creó un canal de comunicación permanente y directo entre ejército y los sindicatos que garantizó a cada una de las partes durante un tiempo, información directa sobre las decisiones y los acontecimientos de mutuo interés, evitando malos entendidos sobre falsas informaciones.

También se firmó el Pacto Social entre AUGURA y Esperanza Paz y Libertad y los paramilitares entregaron tierras a campesinos en el Urabá chocono, acción hecha explícitamente como respuesta a la paz del EPL; mediante de Fundpazcord Fidel Castaño pretendía adelantar su "política social".

Pero paradójicamente, en el más largo plazo, los impactos de la paz con el EPL corrieron en dirección muy diferente. La guerra se intensificó y adquirió más facetas, y el Estado abandonó hasta hoy una política pública de paz en la región. Se limitó a proponer acciones muy puntuales y aisladas sin voluntad ni respaldo. Así, lo que se impuso fue una nueva fase de la guerra (ver primera parte de este documento). Dicho en otras palabras "LA PAZ NO DURO SINO CUATRO MESES!", como lo

afirman todas las voces en la región, y se introdujeron tres nuevos conflictos: los guerrilleros reinsertados se convierten en objetivo militar de la guerrilla (FARC, caraballistas); a su vez, ellos se defienden mediante los Comandos Populares y las milicias obreras que se organizan en las mismas fincas bananeras –especialmente entre Riogrande y la Comunal San Jorge– y los órganos de inteligencia del Estado de los cuales comienzan a formar parte. Se construye así el primero de los conflictos: el que enfrenta a guerrilleros con reinsertados y se desencadena con el tiempo la paramilitarización de algunos de sus miembros.³⁹⁾

Así, se enfrentan violentamente los dos nuevos actores *políticos* –UP y Esperanza, Paz y Libertad–, los unos para impedir la pérdida del espacio político ganado muy ampliamente en la región durante el período en que no hubo competidor de izquierda; los otros, para ganarlo en un terreno donde no tenían trabajo político que lo sustentara (población barrial o parcelera simpatizante.) Los votos en Urabá se consiguen gracias a procesos que de una y otra manera están atados a la tierra: lote-vivienda, parcela, cooperativa de producción. Abortaba así el ensayo de paz en el mismo momento en que nacían sus concreciones: los actores políticos regionales.

Por otra parte, ante la carencia de una política militar acorde con la lógica del proceso global, los territorios dejados por el EPL son copados por los demás grupos guerrilleros –FARC, disidencia del EPL, y nuevos ELN en la región, al igual que por los grupos paramilitares que entonces organizaban su estrategia de recuperación del territorio. Se introduce así el tercero y más cruento y profundo de los conflictos: el que enfrenta guerrillas con paramilitares por el control del territorio.

De 1992 en adelante

El Estado

El Estado abandona de hecho la iniciativa en la guerra y en la paz.



En la confrontación armada con las guerrillas sólo resaltan, la impotencia del Ejército durante las olas terroristas en las que se atenta contra la infraestructura de comunicaciones y eléctrica (enero-abril y agosto/91), y los enfrentamientos en la zona de La Llorona, Dabeiba, Mutatá, Peque y en la vía Montaña-Arboletes cuando, ante el control que las guerrillas ejercen sobre dos de los tres accesos viales a la región, se vuelve imperativa la reacción militar de los responsables de la zona. De resto, no se oye sino el cambio de lenguaje: los grupos guerrilleros son tildados en adelante de "delincuencia" pura y simple, "grupos de bandidos", "barbarie", "patología", "grupo de psiquiatrizados"....

En materia de paz, la acción del Estado es muy pobre, por decir lo menos. El gobierno nacional sólo enarbola esta bandera en una ocasión, cuando entre 1993 y 1994 decide negociar con la Corriente de Renovación Socialista. Sin embargo, los impactos de esta iniciativa sobre la dinámica del conflicto en la región fueron nulos. Allí nada cambió, en contraste con lo sucedido con el EPL dos años antes. Lo demás han sido los consabidos planes de inversión y desarrollo. El "Plan Urabá" no es directamente una "política de paz", a pesar de ser decidido en momentos de auge o repunte de la guerra.⁴⁰ Es un plan de desarrollo como todos los que se formulan y adelantan en el resto de las regiones del país. Éste y los que le siguen⁴¹ corren la misma suerte de siempre: no tienen ningún impacto sobre las condiciones políticas, sociales y culturales de la región.

39 Con el tiempo este conflicto conduce a algo más dramático: el exterminio que comienza a sufrir el grupo de reinsertados por parte de las FARC con apoyo de la disidencia de Caraballo desencadena otro proceso, el de paramilitarización de un grupo significativo de antiguos reinsertados. Su impulso a la autodefensa lleva al grupo a revivir milicias -Comandos Populares; cuando el escándalo público estalla (1994-1995) y la dirigencia de Esperanza Paz y Libertad rectifica sus decisiones, estos grupos se sienten traicionados, se acercan a los paramilitares y voltean sus armas contra sus antiguos compañeros de batalla. A esta decisión la refuerza su impotencia ante los golpes que reciben desde los flancos de las FARC. Entrevista con Miguel Galeano.

40 El Plan de Desarrollo considera la Justicia como uno de sus ejes; complementariamente se crea "la Consejería para Urabá" encargada de manejar ese Plan.

41 En 1993 entran los dineros del terremoto de Murindó y el de los compromisos con los reinsertados y más adelante los de los subsiguientes Planes de Desarrollo.

42 Bajo la gobernación de Gilberto Echeverri Correa.

43 Juan Gómez Martínez.

44 Propuestas sobre de Cascos Azules y Veeduría internacional en caso de que los actores de la guerra aceptaran el Protocolo II de Ginebra DIH, puesta en marcha de un programa de Pedagogía de la Tolerancia, presión por los diálogos regionales, conformación de una Comisión Facilitadora de Paz para el conjunto del territorio departamental)Gobernación de Alvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el gobierno departamental ha tendido a situarse en contravía de toda acción que contribuya al afianzamiento de la credibilidad en las instituciones y de la promoción de la convivencia y la cooperación. Los primeros años de la década⁴² quedaron marcados por la renuncia de Juan Gonzalo Restrepo, gerente asesor de la Gobernación de Antioquia para Urabá, debido a que no encontraba voluntad política departamental para abordar y resolver problemas en la región. Fueron también tiempos en los que el gobernador de Antioquia entraba en abierta confrontación con los alcaldes de Urabá⁴³. Entre tanto, los alcaldes del resto de Antioquia presionaban para que los dineros del departamento no se invirtieran -como estaban comprometidos ya- en Urabá. Y cuando una nueva administración⁴⁴ emprende iniciativas que pudieran relanzar un proceso de debate y de construcción de una política de paz para la región, las acompaña de otra -la organización de las CONVIVIR-, en teoría, cooperativas de seguridad que, en realidad parecieran haberse convertido en otro actor más de violencia.

La sociedad civil

Ante la inoperancia del Estado en asuntos de paz, la sociedad civil toma la iniciativa. Sin embargo, sus acciones son sólo medidas puntuales tendientes a neutralizar o mitigar los efectos más dramáticos de la guerra que se vive en la región. En



este sentido se puede observar que la Iglesia mantiene su proyecto general, promueve la Comisión de la Defensa de la Vida, la Justicia y la Paz y lanza programas centrados en la educación. Su premisa es que, al superar la ignorancia, el pueblo logrará aprender a respetarse y a valorar la vida. La Diócesis de Urabá mantuvo de manera permanente y a través de la Pastoral Social, de la Comisión por la Vida la Justicia y la Paz y de la misma acción personal del obispo, toda clase de contactos, propuestas y mediaciones con los grupos en conflicto.

Además, ante la desbocada lucha entre Esperanza, Paz y Libertad y la UP, se producen dos iniciativas: a) un pacto entre *los partidos políticos* de la región⁴⁵, sin efecto alguno y b) "el consenso de Apartadó", en el que 13 fuerzas cívicas y políticas se unen en torno del nombre de Gloria Cuartas como candidata a la alcaldía. Este es el único de los acuerdos que tiene efectos prácticos inmediatos y de alguna manera perdura a lo largo del tiempo. Cabe resaltar sin embargo, que los partidos políticos no tienen ninguna capacidad de acción, ni de incidencia.⁴⁶

Ante el auge desbocado de la lucha UP-Esperanza, Paz y Libertad en el eje bananero y ante la reactivación de una segunda oleada del paramilitarismo en Urabá (zona norte 92/94), 9 ONG conforman una Comisión Investigadora de los Actores Violentos en Urabá⁴⁷ para esclarecer los hechos. Ante la inexistencia de un aparato judicial, vuelve a ser la sociedad civil —esta vez ajena a la confrontación— la única en capacidad de ejercer esa primera condición de existencia de la sociedad, condición que el Estado no cumple por su propio involucramiento en el conflicto.

Los Planes de Asistencia a las víctimas de la violencia son otro de los campos de acción en el período: la Iglesia lo asume a partir de noviembre/93 con el Centro de Refugiados en Apartadó; *La Cruz Roja* lo hace con un Plan para atender desplazados y víc-

timas de la violencia en Urabá en asuntos de salud a partir de noviembre de 1994. *Los Indígenas* declaran la neutralidad activa en 1994.

El periódico El Colombiano coloca las páginas de su diario todos los domingos durante 6 meses (fines del 94-principios del 95) a disposición de los "Diálogos por Urabá", mediante las cuales cada actor civil y armado hace explícita su posición frente al conflicto. Las FARC son los únicos que no participan.

La Iglesia y los alcaldes de Urabá se ofrecen permanentemente para mediar con las guerrillas. Siempre han abanderado los diálogos regionales. Inclusive los alcaldes piden a los paramilitares una tregua en mayo/95; los paramilitares responden "no".

La sociedad civil regional (el conjunto de los actores no armados) propone volver a Urabá un "Distrito Especial de Paz". El obispo en varias ocasiones sugiere tratamiento especial —a la manera inclusive de experimento— en asuntos de paz. Prácticamente al mismo tiempo, el gobierno nacional la declara "Zona Especial de Orden Público". Es la manifestación, en el momento más dramático, de cómo las orientaciones del gobierno van en contravía de los esfuerzos y tendencias de las de actores de la sociedad civil y de la región.

Son tres rasgos los que predominan entonces: sólo la sociedad civil actúa, pero únicamente con propuestas de neutralización de los efectos de la guerra sobre la población. Son también los actores de la sociedad civil, NO del Estado, los que intentan, hacen, logran o fracasan en la búsqueda de acuerdos para actuar en torno de algún objetivo común; sin embargo, los actores armados siempre han estado ausentes de estos pactos y acuerdos, nunca se ha considerado la conveniencia de invitarlos.

En cambio, cuando el gobierno actúa, tiende a hacerlo en contravía de lo que clama la región. Por ello nadie cree en la capacidad de las instituciones.

Como resultado de todo lo anterior, se produce la libertad de ruta para los paramilitares y su acción de tierra arrasada. Este grupo emite en 1997 prácticamente una declaración de victoria; en mayo declaran bajarle el tono a las hostilidades y quedarse sólo como vigilantes, pues los últimos reductos del EPL se entregaban en 1996 a los mismos paramilitares y las FARC ya no dominaran el territorio.

En 1997, con el cambio de ministro, se produce en el país una nueva propuesta para la paz; no obstante ésta no se asocia a Urabá y de hecho no pasa de ser una propuesta.

La aplicación del Protocolo II de Ginebra —el Derecho Internacional Humanitario— se pone a la orden del día... es lo único sobre lo cual se considera factible actuar aunque hasta ahora tampoco se ha logrado avanzar nada en este sentido....El llamado a organismos internacionales tiene su primera respuesta con la llegada de Pax Christi en 1996; no obstante, sus integrantes constatan la imposibilidad de actuar mientras las partes enfrentadas no muestren voluntad de negociar...

Epílogo

El abandono que el Estado hace de toda política de paz se materializa en la extensión del paramilitarismo, que actúa virulentamente en otras regiones de dominio guerrillero en Antioquia, Chocó, Sucre y Cesar.

Para terminar y sintetizar en cifras lo que significa Antioquia en el contexto de la guerra y de "la paz", anotamos que en este departamento se ha producido el 39,7% del total de los reinsertados del país⁴⁸ y el mayor nivel de población desplazada por la violencia.⁴⁹



45 A final de 1993 y entre liberales, conservadores, Partido Comunista, Esperanza Paz y Libertad y UP.

46 El más palpable de los ejemplos fue el Pacto de 1994 cuando, a propósito de las elecciones que se avecinaban se disparan los niveles de violencia y de enfrentamiento entre las agrupaciones políticas de Esperanza Paz y Libertad y la UP. Tal pacto no contó en los hechos para nada.

47 Entre tanto también deben investigar hechos puntuales como la masacre de La Chinita y el asesinato de los miembros negociadores de la Corriente de Renovación Socialista en Blanquiset.

48 Entrevista a Darío Mejía, Oficina de Reinserción Medellín, Medellín, Julio de 1997.

49 Según el estudio de la Conferencia Episcopal de Colombia publicado en 1995, cuando ya se contaban alrededor de 600.000 personas desplazadas por violencia, sólo Antioquia y Santander superaban proporciones superiores al 10% del total de las víctimas. En primer lugar Antioquia, con 17,95%.